



Consejo Consultivo de Canarias

D I C T A M E N 1 2 2 / 2 0 1 0

(Sección 1ª)

La Laguna, a 11 de marzo de 2010.

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la *Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.I.V.R., en nombre y representación de G.S., por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de R.M.R.D., como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 72/2010 ID)*.*

F U N D A M E N T O S

I

1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado de por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por daños que se imputan al funcionamiento del servicio público viario de titularidad municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. La solicitud ha sido remitida por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con el art. 12.3 de la misma.

3. En su escrito de reclamación, el representante de la empresa afectada manifiesta que el día 21 de noviembre de 2007, a las 23:45 horas, cuando su asegurada, R.M.R.D., circulaba con el vehículo de su titularidad por la Rambla General Franco, en sentido descendente, sintió un fuerte golpe en los bajos de su vehículo al pasar sobre una tapa de alcantarilla que estaba suelta, comprobando,

* PONENTE: Sr. Díaz Martínez.

tras el accidente, que la alcantarilla, que se hallaba a unos 20 metros atrás, estaba sin tapa.

A causa de tal accidente padeció desperfectos por valor de 907,42 euros, que le fueron abonados por la Compañía aseguradora, subrogándose la misma en las acciones y derechos de su asegurada en virtud de lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.

4. En el análisis a efectuar son de aplicación tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, siendo una materia cuya regulación no ha sido desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. Asimismo, es de aplicación el art. 54 de la citada Ley 7/1985, y demás normativa aplicable al servicio público de referencia.

II

1. En lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, el mismo se inició el día 19 de noviembre de 2008, con la presentación del escrito de reclamación referido. La tramitación se desarrolló de forma correcta, realizándose la totalidad de los trámites preceptivos.

El 28 de octubre de 2009 se emitió un informe-Propuesta de Resolución, ya vencido el plazo resolutorio tiempo atrás. Además, la solicitud de Dictamen a este Consejo se realizó el 29 de enero de 2010, es decir, tres meses después de emitirse, lo que incrementa aún más el tiempo para resolver la reclamación presentada, sin justificación para ello.

2. Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, se observa lo siguiente:

La Compañía afectada es titular de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139.1 LRJAP-PAC, puesto que alega haber sufrido daños, que se entienden derivados del funcionamiento del servicio público. Por lo tanto, tiene legitimación activa para presentar la reclamación e iniciar este procedimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 142.1 LRJAP-PAC. La representación ha sido acreditada (art. 32 LRJAP-PAC).

La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como Administración responsable de la gestión del servicio público en cuya prestación, presuntamente, se ha producido el daño.

En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que la iniciación se realiza dentro del plazo de un año posterior a los hechos, tal y como exige el art. 142.5 LRJAP-PAC.

El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente y está individualizado en la Compañía interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 139.2 LRJAP-PAC.

III

1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación presentada, puesto que el Instructor considera que no existe prueba suficiente de que los daños ocasionados al vehículo, asegurado por la empresa interesada, se produjeran a consecuencia del funcionamiento del servicio público.

2. En este caso, la veracidad de lo manifestado por el reclamante ha resultado acreditado en virtud de lo expuesto en el parte de servicio de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, cuyos agentes afirman, tras informar que patrullaban por la zona cuando se produjo el siniestro, "Que estos observan que efectivamente la tapa de alcantarillado está situada aproximadamente a unos veinte metros de su ubicación, por lo que la recolocan en su lugar", lo que evidencia que la misma no estaba colocada, ni sellada debidamente.

Así mismo, el Servicio municipal de Gestión y Control de Servicios Públicos señaló, en su informe de 15 de diciembre de 2008, que "Cursada visita se comprueba que la anomalía a que se hace referencia se trata de una tapa de alcantarillado (...)", lo que corrobora lo manifestado por la conductora del vehículo y los agentes actuantes respecto a la existencia de anomalías en dicha tapa de alcantarillado.

Además, los desperfectos padecidos han resultado acreditados en base a la documentación aportada al expediente.

Por lo tanto, concurren en el presente asunto una serie de elementos probatorios que confirman la versión de los hechos dada por el representante de la interesada.

3. En lo que se refiere al funcionamiento del servicio público, éste ha sido deficiente, pues la Corporación Local debe mantener en las debidas condiciones de conservación las vías de su titularidad, así como los elementos que forman parte de la misma y que pueden afectar a sus usuarios, como ocurre en este caso con la mencionada tapa de alcantarilla, obligación que se ha incumplido en este supuesto.

4. La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación, no es conforme a Derecho por los motivos expuestos anteriormente.

A la interesada le corresponde la indemnización solicitada, ascendente a 907,42 euros, que es correcta y está justificada mediante la documentación presentada.

La cuantía de esta indemnización, referida al día en el que se produjo el daño, ha de actualizarse en relación con la fecha de resolución del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 141.3 LRJAP-PAC.

C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución, que tiene carácter desestimatorio, no es conforme a Derecho, debiendo ser indemnizada la Compañía interesada en la forma expuesta en el Fundamento III.4.